

DESPERTANDO DE LA ANESTESIA: DECLIVE Y VIOLENCIA EN FRANCIA

ALEXIS MORAITIS

TRADUCCIÓN DE MARIO AGUIRIANO

La LBD40 es una pistola antidisturbios de mano equipada con una mira electrónica que le permite lanzar balas de goma de cuarenta milímetros a veinticinco metros de distancia. Utilizada sistemáticamente por la policía francesa para reprimir a los manifestantes que salieron a la calle para desafiar las «reformas» del presidente Emmanuel Macron, esta arma no letal de fabricación suiza dejó decenas de desmembrados y ciegos. La LBD40 es el arma preferida de una élite estatal ansiosa que teme que la sociedad que preside escape a su control y deba ser domada con balas de goma.

De hecho, la sociedad francesa es «cada vez más salvaje», según el Ministro del Interior, Gerald Darmanin. Hay una grave «crisis de autoridad», sostiene, y el Estado tiene que «reafirmar su poder» y «no dejar pasar nada». En mayo de 2021, el mismo ministro, en señal de pleno apoyo a «sus tropas», participó en una protesta organizada por los sindicatos policiales franceses. Reunidos frente a la Asamblea Nacional, acusaron a la justicia de fallarles, de ser demasiado indulgente con el aumento de la criminalidad. Sin embargo, las cárceles francesas están gravemente superpobladas y el número de encarcelados nunca ha sido tan elevado como hoy. Sin embargo, para el Ministro del Interior, las celdas de las prisiones no están lo suficientemente llenas.

No sólo los que están a la cabeza del gobierno están nerviosos. En la primavera de 2021, una revista de extrema derecha publicó dos cartas escritas por un grupo de generales retirados del ejército y firmadas por miles de militares en activo, en las que advertían de que se avecinaba una guerra civil. Las cartas describían un país bajo amenazas insoportables: ideólogos antirracistas y fundamentalistas religiosos que preparan el terreno para una guerra racial, y alborotadores enmascarados que se aprovechan de los razonables agravios de los franceses para sembrar el caos en las calles. Según los firmantes, el ejército tendrá que intervenir inevitablemente para restablecer el orden. En una encuesta de opinión pública realizada poco después, los franceses expresaron preocupaciones similares: El 73% de los encuestados cree que la sociedad francesa se está

descomponiendo, mientras que el 45% opina que, efectivamente, está a punto de estallar una guerra civil.

Las amenazas de golpes militares, la creciente sensación de inseguridad y el aumento de la violencia estatal son síntomas del arraigado declive económico que se ha apoderado de Francia. Como en la mayoría de los países avanzados, el crecimiento se ralentiza desde hace varias décadas. La economía francesa no crece tan rápido como antes, lo que no garantiza la seguridad económica y el bienestar de todos. A medida que la producción de valor se estanca, las luchas por el reparto de los recursos existentes se intensifican, amenazando la estabilidad social. El estancamiento crea un ambiente propicio a la caza de brujas, ya que Francia busca las fuentes de su caída en las hordas de inmigrantes, las minorías religiosas o los jóvenes alborotadores.

El Estado está llamado a gobernar esta sociedad plagada de tensiones desvelando plenamente su rostro autoritario. La desaceleración económica empuja a cada vez más personas al borde de la pauperización, creando niveles abrumadores de angustia social que el Estado es incapaz de abordar si no es mediante la represión violenta. La era Macron ha constituido el periodo en el que muchas de las tensiones de gobernar en condiciones de estancamiento económico se han manifestado de forma brutal.

Una presidencia turbulenta

La presidencia de Macron ha sido sin duda una de las más turbulentas de la V República. El empeño de su Gobierno por sacar adelante su programa político neoliberal se ha visto recurrentemente contrarrestado por oleadas masivas de protestas. Poco después de su elección en 2017, las reformas del mercado laboral del Gobierno ya se encontraron con la oposición de los trabajadores en huelga. Tres años después, su reforma de las pensiones vio surgir un movimiento huelguístico que no se había visto en 25 años. En 2018-19, sus reformas fiscales a favor de los ricos, ampliamente contestadas, vieron el levantamiento de los *Gilets Jaunes* (Chalecos Amarillos), un movimiento nacional que sacudió al establishment francés durante meses. En plena pandemia, manifestantes y policía volvieron a enfrentarse por el anuncio de un nuevo proyecto de ley de seguridad. Por cada reforma importante que intentaba

aplicar, el gobierno de Macron se enfrentaba a un poderoso movimiento social que se levantaba en su contra.

La fervorosa oposición popular a las reformas no deseadas fue correspondida por los arrebatos autoritarios del gobierno. La represión policial masiva de los *Gilets Jaunes* fue incluso condenada por Anne-Sophie Simpere, de Amnistía Internacional, por constituir una amenaza al derecho a la protesta «nunca vista en la historia moderna de Francia». El mencionado proyecto de ley de seguridad pretendía aumentar los derechos de la policía y, entre otras cosas, intensificar el uso cotidiano de drones para el mantenimiento del orden público. Más tarde, en un giro McCarthyesco, el gobierno instó a la necesidad de abordar el problema del «islamo-izquierdismo», una corriente intelectual imaginada por la teoría de la conspiración que supuestamente plaga las universidades francesas y erosiona la unidad nacional. En una campaña electoral prematuramente iniciada, el discurso de Macron dio un giro securitario espectacular, en el que la priorización de las cuestiones de orden público y las promesas de reforzar las fuerzas policiales ocuparon un lugar destacado.

Francia se encuentra atrapada en una situación de profundo conflicto: los movimientos sociales luchan contra la aplicación de dolorosas reformas fiscales y del mercado laboral y el Gobierno pierde la paciencia con la disidencia y no duda en puentearla mediante una intensificación de las medidas policiales. Esta tensión es el síntoma de una patología subyacente de la economía política francesa, según la cual las formas existentes de gestionar el descontento social se han vuelto cada vez más inadecuadas y están siendo sustituidas progresivamente por otras más autoritarias.

Gran parte de la oposición de izquierdas a Macron le ha acusado de perseguir obstinadamente un desacreditado programa económico neoliberal que da prioridad a los ricos y desatiende las necesidades de la población en general. Sus impopulares reformas del mercado laboral y fiscales favorables a las empresas le valieron rápidamente el título de «Presidente de los ricos». Además, muchos han comparado su estilo de gobierno con el de Luis XIV, el «Rey Sol», dado su demostrado desprecio por las clases populares francesas y su flagrante ignorancia de sus luchas cotidianas.

No cabe duda de que las políticas de Macron han beneficiado a los ricos. Sin embargo, las críticas personalizadas que culpan unilateralmente de los problemas de Francia a los gobiernos individuales y a sus inclinaciones ideológicas neoliberales pasan por alto las tensiones subyacentes del capitalismo francés. La crisis social de Francia no es simplemente el resultado de las opciones políticas irracionales de los gobiernos, sino que está moldeada por los impasses estructurales generados por la ralentización del crecimiento. Las fuentes del

malestar actual están profundamente arraigadas y pueden rastrearse cuarenta años atrás, cuando terminó el boom de la posguerra y comenzó la marcha del declive económico que ahora asola Francia.

De la gloria al declive

En los treinta años que siguieron a su liberación de la ocupación nazi —los llamados *Trente Glorieuses*—, Francia experimentó una forma de modernización económica intensamente impulsada por el Estado. En aquella época, Francia seguía siendo una economía predominantemente agrícola y la industria manufacturera estaba dominada por pequeños establecimientos que sólo empleaban a un puñado de trabajadores. Las pocas fábricas de mayor tamaño pertenecían a una clase industrial nacional conservadora que, al beneficiarse de mercados nacionales y coloniales protegidos de la competencia extranjera, carecía de incentivos para invertir en nuevos procesos de producción. Para superar el retraso tecnológico de la industria francesa y permitirle alcanzar a sus competidores europeos y estadounidenses, los modernizadores franceses desplegaron una serie de mecanismos institucionales dirigistas que otorgaban al Estado el poder discrecional de controlar el ritmo y la dirección del desarrollo industrial del país¹. Las políticas industriales activistas, el control público del sistema bancario nacional y la planificación indicativa fueron instrumentos clave utilizados por los gobiernos franceses para acelerar la modernización. Mediante el control directo de industrias nacionalizadas clave o la asignación estratégica de créditos a campeones nacionales escogidos, se consiguió que sectores enteros se atuvieran a los objetivos de desarrollo fijados por el propio Estado. La modernización dirigida por el Estado permitió a la industria francesa realizar grandes avances, ya que muchas empresas pudieron ampliar sus capacidades, alcanzar mercados internacionales más amplios e incluso convertirse en multinacionales.

El dirigismo se basaba en la marginación de las preocupaciones de la clase trabajadora. En palabras del politólogo Jack Hayward, los sindicatos franceses eran «marginados de la comunidad política», ya que su capacidad para influir en

¹ Zysman, John. *Governments, Markets, and Growth: Financial Systems and Politics of Industrial Change*, Ithaca, New York, 1983.

el proceso de toma de decisiones se había reducido considerablemente². En lugar de un diálogo social institucionalizado, los trabajadores obtenían mejoras salariales mediante huelgas salvajes, mientras que los empresarios, a su vez, respondían con subidas de precios para recuperar sus beneficios. Este proceso, que Elie Cohen denominó «compromiso social inflacionista», fue tolerado por las élites del Estado, ya que permitía a una clase obrera combativa obtener periódicamente ganancias salariales sin obstruir todo el proceso de modernización³. Para proteger la industria nacional de la inflación, el Estado promulgaba con frecuencia devaluaciones monetarias para restablecer la competitividad de los precios de los productos franceses en los mercados mundiales. Mayo de 1968 fue la culminación de este pacto social. Durante el mes que duró la revuelta, con una serie de ocupaciones de fábricas, diez millones de trabajadores en huelga y protestas estudiantiles diarias, la clase dirigente francesa fue puesta de rodillas. La revuelta terminó con generosos aumentos salariales y la ampliación de los derechos de sindicación que se convirtieron en la base de futuros aumentos salariales significativos.

Sin embargo, la espiral inflacionista que caracterizó el crecimiento de la posguerra perjudicó cada vez más a las empresas francesas tras las crisis del petróleo de los años setenta. Había que controlar urgentemente la inflación y los crecientes costes laborales para evitar un mayor deterioro de la balanza comercial del país. Durante los *Trente Glorieuses*, Francia había expandido masivamente sus exportaciones mundiales, pero la carrera mundial de la posguerra por aumentar las capacidades productivas encontró sus límites cuando los mercados manufactureros se saturaron⁴. Por un lado, la crisis reveló que la competitividad de las empresas francesas seguía estando por detrás de la de las multinacionales alemanas, estadounidenses o japonesas en la fabricación avanzada. Por otro lado, la crisis puso de manifiesto que sus costes laborales relativamente elevados no le permitían hacer frente a la competencia de las economías de reciente industrialización en las industrias intensivas en mano de obra. Las industrias textiles y de confección tradicionales estaban amenazadas de extinción, las industrias más intensivas en capital, como la siderurgia o la construcción naval, seguían empleando tecnologías anticuadas, mientras que líderes nacionales como el automóvil sólo podían encabezar el esfuerzo exportador sustituyendo las plantas existentes por otras altamente automatizadas. Francia se vio obligada a reorganizar su aparato industrial para sobrevivir en unos mercados saturados.

² Hayward, Jack. *The State and the Market Economy: Industrial Patriotism and Economic Intervention in France*, New York, 1986.

³ Cohen, Elie. *L'Etat Brancardier: Politiques du Déclin Industriel (1974-1984)*, Paris, 1989.

⁴ Brenner, Robert. *The Economics of Global Turbulence*, London, 2006.

En la década de 1980, a medida que se agravaba la crisis de la industria nacional, Francia experimentó un giro neoliberal que pretendía reestructurar y reorganizar la economía nacional siguiendo pautas más competitivas. En 1983, el giro de 180 grados del presidente socialista François Mitterrand —de un programa expansionista de inspiración keynesiana a la austeridad y una mayor integración europea— fue el momento decisivo que catalizó esta transición. Para reformar la economía, el Estado retiró la ayuda financiera a las industrias improductivas y patrocinó una reestructuración tecnológica destructora de empleo en otras. En las industrias nacionalizadas, los socialistas y los gobiernos posteriores diezmaron la mano de obra con interminables rondas de medidas de racionalización, al tiempo que financiaban generosamente los intentos de las empresas privadas de emplear las tecnologías del futuro. Los gobiernos posteriores a la década de 1980 también emprendieron importantes reformas para facilitar el mercado, que incluían la desregulación financiera, cambios en la legislación laboral, la flexibilización de la regulación empresarial y amplios programas de privatización. La razón de ser de todos estos cambios políticos era exponer la economía nacional a la fuerza disciplinaria del mercado mundial, al tiempo que se intervenía estratégicamente para apoyar a los sectores estratégicos desde el punto de vista comercial.

La integración europea ayudó a las élites estatales a impulsar reformas económicas impopulares. Los responsables políticos limitaron la canalización de fondos hacia plantas obsoletas apelando a la política de competencia de la Comisión Europea y a las estrictas normas sobre ayudas estatales. Del mismo modo, las élites francesas consideraron que las normas fiscales sobre déficit presupuestario inscritas en los tratados europeos facilitaban la aplicación de medidas de austeridad. De hecho, la infame regla del 3% de déficit del tratado de Maastricht fue una invención puramente francesa que se le ocurrió al gobierno de Mitterrand cuando buscaba una norma tecnocrática creíble para limitar el gasto público⁵. El compromiso inflacionista de la posguerra se rompió, ya que las élites francesas optaron por la integración monetaria europea precisamente para ahogar las tendencias inflacionistas de la economía nacional y frenar el crecimiento de la renta. Además, la moneda común privó al Estado francés de la capacidad de amortiguar los golpes de la competencia extranjera mediante devaluaciones monetarias, como en el pasado. En su lugar, el aumento de la productividad a nivel de empresa o la reducción de los costes laborales eran las

⁵ Roufos, Pavlos. *A Happy Future is a Thing of the Past*, London, 2018, p. 33.

únicas estrategias realistas que les quedaban a las empresas que necesitaban adaptarse a las presiones competitivas del mercado mundial.

La búsqueda de competitividad en un contexto de estancamiento económico mundial cada vez más intenso conllevó importantes dislocaciones sociales. La sobreoferta de los mercados manufactureros no permitió a las empresas ampliar masivamente sus capacidades, pero las presiones de la competencia las obligaron a aumentar la productividad y a producir de forma más eficiente para mantenerse a flote⁶. La producción no pudo crecer lo suficientemente rápido como para compensar las pérdidas de empleo que acompañaron al cambio técnico en las empresas líderes y al cierre de las plantas en dificultades. La producción francesa se vio obligada a adaptarse a las condiciones del mercado mundial, pero el resultado fue una intensa desindustrialización que lleva décadas asolando el país. Como se argumenta más adelante, el declive industrial tuvo un elevado coste social y presupuestario, y esta factura se hizo cada vez más difícil de pagar a medida que la economía luchaba por recuperar su antiguo dinamismo.

Mal “timing”

La integración europea y las medidas de liberalización posteriores a los años ochenta pretendían liberar al Estado de la carga de mantener con vida las grandes empresas deficitarias o de negociar directamente con los sindicatos el destino del empleo en las distintas industrias. Las élites estatales esperaban protegerse de las reacciones políticas internas y seguir su preferencia política por las reformas dolorosas apelando a las normativas supranacionales de la UE o a las presiones ineludibles de la globalización. Sin embargo, estas estrategias no consiguieron sacar al Estado del centro de la contestación social, ya que siguió siendo el principal objetivo de los movimientos sociales que se resistían a la neoliberalización. Para paliar los costes sociales de la desindustrialización, el Estado francés construyó un costoso aparato de bienestar que posteriormente trató de deshacer a medida que se intensificaba el estancamiento. Se inició así una nueva oleada de luchas sociales, esta vez sobre el futuro de un Estado del bienestar que, aunque insuficientemente generoso, ha sido sin embargo crucial para mantener alguna forma de coherencia social.

⁶ Benanav, Aaron. “Automation and the Future of Work – I,” *New Left Review* 119, September-October, 2019, p. 28.

Las reformas neoliberales que continuaron a buen ritmo durante las dos presidencias consecutivas de Mitterrand tuvieron un coste social cada vez mayor, ya que el desempleo se disparó, las antiguas regiones industriales se sumieron en un declive económico permanente y los trabajadores quedaron en peor situación al debilitarse su poder de negociación. El descontento social se hizo patente en el menguante apoyo a los socialistas en las elecciones regionales o legislativas, pero también en las calles. Inevitablemente, la reestructuración económica fue resistida: los trabajadores de la industria automovilística hicieron huelgas salvajes, los trabajadores de la siderurgia marcharon a París, los ferroviarios paralizaron el país. Todos los planes de reforma de la economía francesa corrían el riesgo de reavivar las tensiones que desembocaron en la agitación de mayo de 1968.

Aunque el Estado consideraba que estas dolorosas medidas económicas eran necesarias para mejorar la competitividad, también necesitaba evitar la aparición de una crisis de legitimidad en toda regla que hiciera inmanejable el orden social. Para hacer frente al espectro de la revuelta, los responsables políticos franceses pusieron en marcha un modo de gestionar el descontento social que Jonah Levy denominó la estrategia de la «anestesia social»⁷. Las élites estatales desarrollaron un Estado del bienestar relativamente amplio para aplacar las tensiones sociales provocadas por la reestructuración de la economía francesa. Pusieron en marcha una serie de medidas sociales —incluidos diversos regímenes públicos de pensiones, ayudas sociales y subsidios de desempleo— que pretendían adormecer el dolor de la reestructuración económica. La anestesia social vino a sustituir al compromiso social inflacionista de los *Trente Glorieuses*. Inadvertidamente, sin embargo, la década de 1980 sentó las bases de lo que se convertiría en el Estado del bienestar más costoso de la OCDE, ya que Francia tiene ahora los niveles más altos de gasto social dentro de este grupo de países. En comparación con otras economías avanzadas, el Estado francés echa mucho más mano a la cartera para financiar un Estado del bienestar creado esencialmente para comprar la paz social y remendar las heridas de la desindustrialización.

Se podría argumentar que, con la estrategia de anestesia social, el Estado francés sólo encontró una forma temporal de casar los objetivos de reforma económica y paz social. De hecho, tiene límites fundamentales, el más importante

⁷ Levy, Jonah. “From the Dirigiste State to the Social Anaesthesia State”, *Modern & Contemporary France*, 16: 4, 2008.

de los cuales es precisamente el menguante dinamismo de la economía francesa. Lejos quedan ya los años dorados de la posguerra (1950-1974), cuando la economía crecía a un ritmo medio anual en torno al 5%. En la era posterior a 2008, la economía ha estado funcionando a un tercio de esta tasa. El bajo rendimiento económico de Francia se refleja en las vacilantes tasas de crecimiento de la productividad agregada, que iniciaron un declive gradual en los años ochenta y se acentuaron con cada década que pasaba. La economía francesa es sencillamente incapaz de emular los niveles de crecimiento económico y creciente riqueza establecidos durante el boom de la posguerra.

Según el Consejo Nacional de Productividad francés, la relativa debilidad de las cualificaciones y competencias de la población activa, la lenta difusión de las tecnologías digitales en las empresas francesas y la atonía de los niveles de inversión privada en investigación y desarrollo han contribuido en distinto grado a la ralentización de la productividad de la economía francesa⁸. Sin embargo, la anemia económica no es un fenómeno específico de Francia, ya que la ralentización de la productividad también ha envuelto a sus homólogos de la OCDE. Para los aspirantes a reformistas, el declive económico aparece como el resultado de las deficiencias internas y las persistentes rigideces institucionales que siguen impidiendo que el país desarrolle todo su potencial competitivo. Pero por mucho que busquen en el interior las fuentes del declive nacional, la desaceleración económica de Francia es una manifestación local de la recesión global que define la economía mundial desde los años setenta.

El problema de Francia es que empezó a construir un costoso Estado del bienestar en un periodo en el que se estaba produciendo esta desaceleración económica, cuando menos podía permitírselo. La desaceleración limita los recursos de que dispone el Estado para mantener altos niveles de gasto social. Para financiarlo, el Estado tuvo inevitablemente que, por un lado, ampliar su capacidad tributaria hasta el punto de que ahora Francia tiene la segunda ratio impuestos/PIB más alta de la OCDE después de Dinamarca. Por otro lado, acumuló elevadas cantidades de deuda a medida que año tras año el presupuesto del país se mantenía en números rojos, siendo las autoridades francesas incapaces en su mayor parte de cumplir la norma del 3% de déficit impuesta por los tratados europeos. Los recursos necesarios para financiar la anestesia social disminuyen peligrosamente, y las normas fiscales europeas se han mostrado incapaces de disciplinar el gasto público.

⁸ *Conseil National de Productivité, Productivité et Compétitivité: Où en est la France dans la Zone Euro?*, Paris, 2019.

A medida que las tasas de crecimiento continuaban su movimiento descendente, la estrategia de anestesia social pesaba cada vez más sobre el Estado francés. A partir de mediados de los años noventa, los gobiernos consecutivos la percibieron como un obstáculo para la sostenibilidad de las finanzas y la competitividad económica. Una serie de reformas económicas trataron de deconstruir este costoso Estado del bienestar con un éxito limitado. Los intentos de reformar el bienestar y el mercado laboral se saldaron con revueltas sociales, como las huelgas de 1995 y el movimiento estudiantil de 2006, que provocaron la retirada de las reformas propuestas en las pensiones y los contratos de trabajo, respectivamente. La expansión intempestiva de un costoso Estado del bienestar en una época de estancamiento es el telón de fondo de las luchas sociales contemporáneas en Francia.

Desmantelando el Estado del Bienestar

Durante las últimas décadas, el principal reto de las élites estatales ha sido liberarse de los costosos grilletes del Estado de anestesia social y, al mismo tiempo, mantener a raya la amenaza de revuelta. Pero está claro que, como demuestra la presidencia de Macron, ha resultado imposible sortear con éxito estos imperativos contrapuestos. Tirando en dos direcciones, el Estado se enfrenta a importantes presiones económicas para desmantelar el Estado del bienestar y a presiones ascendentes que hacen que esa estrategia sea social y políticamente insostenible, dados los costes que impone a la población francesa.

Para los gestores estatales, el Estado del bienestar posterior a la década de 1980 constituye un problema tanto fiscal como de competitividad. Además de contribuir a los elevados niveles de deuda, el gasto social absorbe una gran parte de los fondos públicos que podrían reasignarse a tareas supuestamente más productivas. Por ejemplo, las reformas de las pensiones públicas o del sistema de seguro de desempleo promovidas por el gobierno de Macron pretenden liberar al Estado de algunos de sus costosos compromisos sociales para liberar los fondos necesarios para financiar proyectos de formación de competencias, I+D e innovación científica que podrían situar a Francia en la vanguardia de la frontera tecnológica. Desde el punto de vista del Estado, se paga a los parados y a los pensionistas para que simplemente existan, cuando ese dinero podría destinarse a reindustrializar Francia.

Además, los gestores del Estado francés sostienen desde hace tiempo que los niveles comparativamente elevados de impuestos necesarios para financiar el Estado del bienestar asfixian a las empresas y disuaden de seguir invirtiendo. El elevado nivel de las cotizaciones sociales que deben pagar las empresas francesas en relación con sus competidoras de la OCDE les impide realizar las inversiones necesarias para recuperar una ventaja competitiva en la carrera mundial por la productividad y recuperar algunas cuotas de mercado perdidas frente a la competencia extranjera. Los gestores del Estado han intentado ayudar a las empresas reformando lo que consideran un mercado laboral rígido que aumenta el coste de contratación (y despido) para los empresarios y un sistema de bienestar que se está comiendo los recursos privados que podrían invertirse en cambio en áreas que mejoren la productividad.

Al mismo tiempo, el desmantelamiento del Estado del bienestar tiene un elevado coste social que, lógicamente, los ciudadanos no están dispuestos a pagar. Los malos resultados económicos de Francia han frenado el ritmo de creación de empleo. En consecuencia, se ha producido un aumento sustancial de las formas precarias de trabajo (es decir, de duración determinada, a tiempo parcial) y una tasa de desempleo obstinadamente alta que ha fluctuado en torno al diez por ciento durante las últimas cuatro décadas. En este contexto, las ayudas sociales del Estado desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del nivel de vida de los ciudadanos: hoy en día, algo más de un tercio de la renta disponible total de los hogares se compone de ayudas sociales, frente a sólo una séptima parte en 1949⁹. La retirada de estas ayudas sin una sustitución sólida impulsaría las estadísticas de desigualdad y pobreza a niveles aún sin precedentes.

Además, en los últimos años, las exenciones fiscales concedidas a las empresas y los aumentos de diversas formas de impuestos sobre la renta o el consumo de las personas físicas han señalado una tendencia a desplazar la carga del Estado del bienestar del capital a los hogares. Especialmente desde la crisis de 2008, las reducciones de las contribuciones de las empresas se compensan cada vez más con aumentos de los impuestos sobre la vivienda, los tipos del IVA y las ecotasas que pagan los consumidores. De forma característica, la revuelta de los *Gilets Jaunes* fue provocada por una subida de los impuestos sobre los carburantes, que a su vez fue precedida por la supresión de un impuesto sobre el patrimonio llamado ISF. En otras palabras, el nivel de vida de los ciudadanos se ve amenazado tanto por la reducción progresiva de la protección social como por las continuas subidas de impuestos que se comen parte de los ingresos de los hogares, especialmente los de la clase media.

⁹ INSEE, *Trente Ans de Vie Economique et Sociale*, Paris, 2014, p. 14; INSEE, *France, Portrait Social*, Paris, 2020, p. 283.

En la actualidad, Francia tiene niveles más bajos de desigualdad, precariedad y bajos salarios que la media de la OCDE, precisamente debido a los efectos redistributivos del Estado de anestesia social. Sin embargo, su desmantelamiento empujará a la gente a los brazos de un mercado laboral disfuncional, en el que una parte cada vez mayor de los puestos de trabajo de nueva creación están mal pagados y son precarios¹⁰. Los reformistas sugieren que, con una mayor desregulación del mercado laboral y la racionalización de la provisión de prestaciones sociales, la economía creará más puestos de trabajo, ya que a las empresas les resultará más barato contratar y, al mismo tiempo, el desempleo de larga duración será inviable para aquellos a los que «tiente». Las élites estatales francesas pretenden emular el tipo de reformas de las prestaciones sociales ya emprendidas en otras economías europeas, como el Reino Unido o Alemania, donde la proliferación de contratos de cero horas o los llamados *minijobs* han permitido alcanzar algo parecido al pleno empleo, aunque precario. El inconveniente no tan publicitado de la reforma de la asistencia social francesa es que, en una economía estancada, la alternativa al seguro de desempleo financiado con fondos públicos no es la seguridad en el empleo, sino la precariedad del mercado laboral.

Sin embargo, las ayudas sociales francesas no sacan necesariamente a la gente de la pobreza, sino que simplemente ofrecen medios para hacerle frente. Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, dos de cada tres beneficiarios de la RSA, una ayuda a la renta concedida a los hogares con bajos ingresos, viven en malas condiciones, ya que su capacidad para satisfacer determinadas necesidades sanitarias, de vivienda o alimentarias se ve gravemente limitada¹¹. La asistencia que ofrecen los mecanismos de bienestar social existentes es, en cierto modo, insuficiente para llevar una vida digna. Sin embargo, los imperativos económicos que persiguen las élites francesas no sólo impiden que sigan ampliándose, sino que, por el contrario, las obligan a buscar la manera de reducirlas en un esfuerzo desesperado por sanear las finanzas y la competitividad.

La pandemia mundial amplificó estas tensiones subyacentes. Al igual que muchos Estados, Francia adoptó medidas fiscales masivas para mantener a la gente en nómina y evitar quiebras a gran escala. Los esfuerzos que habrá que hacer para reducir las enormes deudas contraídas recientemente a niveles más

¹⁰ March, Olivier y Minni, Claude. “The Major Transformations of the French Labour Market since the Early 1960s”, *Economie et Statistique*, no. 510-511-512, pp. 89-107.

¹¹ Calvo, Mathieuand y Richet-Mastain, Lucile. «Les conditions de vie des bénéficiaires de minima sociaux et de la prime d’activité fin 2018», *Dossiers de la DREES*, no. 61, 2020, p. 5.

sostenibles —aunque sólo sea para encontrar más margen de maniobra para responder a la próxima crisis— plantearán de forma aún más explícita los dilemas distributivos que rivalizan con la anémica economía francesa: recortar el bienestar y gravar el consumo de los ciudadanos con el riesgo de revueltas al estilo de las de los chalecos amarillos, o aumentar las contribuciones de las empresas con el riesgo de disuadir las ya bajas tasas de nuevas inversiones y creación de empleo.

Del Bienestar a los Drones

En respuesta a la crisis de los *Gilets Jaunes*, el Gobierno prometió añadir otros 17.000 millones de euros a los presupuestos de 2019 y 2020 mediante medidas destinadas a mejorar los ingresos de la población. A pesar de la promesa preelectoral de Macron de acabar con «la resistencia al cambio de los galos», ante un movimiento social imprevisible sucumbió a la tentación de cebar la bomba de la anestesia social. Sin embargo, sus 17.000 millones no bastaron para aplacar las tensiones existentes y fueron rápidamente seguidos por sus propias promesas de recortar el gasto social reorganizando por completo los sistemas públicos de pensiones y de seguro de desempleo. En un contexto de estancamiento cada vez mayor, las élites estatales se dan cuenta de que las herramientas existentes para gestionar el descontento social se están quedando rápidamente obsoletas y se ven obligadas a idear formas alternativas de llevar a cabo la reforma económica a pesar de la resistencia social. Como la zanahoria del gasto social se ha vuelto demasiado cara y el palo de las normas presupuestarias europeas ha demostrado ser demasiado blando, el recurso a la cruda represión de la resistencia social aparece como una opción tentadora para los reformistas desesperados incapaces de recabar el consentimiento popular para sus dolorosas políticas.

El progresivo agotamiento de la estrategia de anestesia social se refleja en la evolución de las pautas de gestión de las protestas. Como sugieren Olivier Fillieule y Fabien Jobard en su reciente libro, *Politiques du désordre* (Políticas del desorden), a partir de finales de la década de 1990 los gobiernos franceses se volvieron cada vez más intolerantes con los movimientos de protesta que se oponían a las reformas gubernamentales. En 1995, el Primer Ministro Alain Juppé se vio obligado a dar marcha atrás en una controvertida reforma de las pensiones ante una oleada de huelgas que no se veía desde 1968 y que, en su punto álgido, vio marchar por las calles a dos millones de personas. Los gobiernos posteriores trataron de evitar que se repitiera la traumática derrota de Juppé. En

el discurso y en la práctica, se esforzaron por deslegitimar y reprimir los movimientos de protesta para restringir su influencia en la formulación de políticas. Como afirman los autores, los gobiernos posteriores a 1995 pasaron a depender cada vez más de la policía para mantener el orden público y, en esencia, le dieron carta blanca para reprimir enérgicamente los movimientos de protesta al menor indicio de agitación. El resultado ha sido el estallido de violencia que hemos visto en las calles francesas en los últimos años¹².

Que la creciente precariedad y la represión estatal van de la mano es una observación banal para los suburbios desfavorecidos (*banlieues*) y los llamados barrios prioritarios de Francia. Estas zonas concentran los mayores niveles de desempleo y pobreza y, por consiguiente, también un elevado número de beneficiarios de ayudas sociales. Allí, las personas —muchas de ellas musulmanas y de ascendencia inmigrante— están sometidas constantemente a una vigilancia policial racializada, a controles de identidad cotidianos improvisados y al uso excesivo de la fuerza por parte de las brigadas contra la delincuencia que recorren las *banlieues* francesas. Las zonas y barrios desfavorecidos no se perciben como lugares que sufren de forma desproporcionada los efectos de una crisis económica profundamente arraigada, sino como focos de delincuencia y disturbios que deben disciplinarse mediante una mayor vigilancia.

Gran parte de la periferia francesa se había beneficiado de la floreciente actividad económica durante el apogeo de la industrialización dirigista. Por ejemplo, las *banlieues* parisinas albergaban algunas fábricas emblemáticas de automóviles y metalurgia. A partir de la década de 1970, en el contexto de la desindustrialización, estas plantas cerraron o se automatizaron y emplearon sólo a una fracción de su antigua mano de obra, dejando a la región expuesta a niveles de desempleo permanentemente elevados. En las dos décadas siguientes, los gobiernos consecutivos destinaron inicialmente dinero a políticas urbanas solidarias que pretendían transferir fondos de las comunas más ricas a las menos afortunadas y mitigar algunas dislocaciones del mercado laboral en curso. Sin embargo, a medida que se agravaba el declive económico y disminuía la anestesia social, la crisis urbana pasó a considerarse una amenaza para la autoridad estatal y la cohesión nacional¹³. Incapaz de reabrir las fábricas cerradas, el Estado

¹² Fillieule, Olivier y Jobard, Fabien. *Politiques du Désordre*, Paris, 2020.

¹³ Ver Dikeç, Mustafa. “Two Decades of French Urban Policy: From Social Development of Neighborhoods to the Republican Penal State,” *Antipode* 38: 1, 2006.

empezó a hacer frente a la inseguridad económica aumentando la presencia policial local y reforzando el aparato judicial.

La gestión cada vez más autoritaria del descontento social aparece como una respuesta casi natural a la dificultad de compaginar los imperativos sociales y de mercado en una economía tambaleante. Cuando la gente pierde su capacidad de impugnar la política en las calles, a menudo se ve obligada a encontrar formas alternativas, a menudo alborotadoras, de hacerse oír. Lo que desde la perspectiva de la gente es una forma de resistencia a la inmiseración de sus vidas, aparece para los gestores del Estado como una amenaza al orden público. Mientras que en el pasado el Estado intentaba apaciguar el descontento aflojando los cinturones, hoy resulta cada vez más prohibitivo hacerlo en el contexto de una economía estancada y una deuda creciente. Ya se trate de *Gilets Jaunes* ocupando rotondas o de jóvenes rebeldes levantando barricadas en las calles, todo lo que no se pueda apaciguar con gasto público debe ser, por tanto, vigilado, disciplinado y brutalizado.

Como dice el rapero Nakk en *Chanson Triste* (Canción triste), una joya del hip hop francés, «no hay rompeventanas, sólo tipos que quieren existir». Mientras la economía francesa niega los medios para alcanzar una vida digna, la exigencia de simplemente existir se hace cada vez más fuerte, pero el Estado sólo escucha la expectativa incoherente e irrazonable de una chusma revoltosa.

La presidencia turbulenta y autoritaria de Macron es un momento dentro de una trayectoria más larga de la política francesa en la que el Estado ha luchado por contener el descontento social impulsando el gasto público. En la actualidad, se presiona al Estado para que desmantele su costoso Estado del bienestar, pero no hay nada con lo que sustituirlo aparte de balas de goma, drones y granadas de gas lacrimógeno.

Impases políticos

En medio de una lluvia de balas de goma y una niebla de gases lacrimógenos que duró años, los manifestantes y las fuerzas policiales heridos se cuentan por miles. Algunos perdieron la vida, otros los ojos, otros las manos. La turbulenta presidencia de Macron terminará con unas elecciones igualmente turbulentas y muy esperadas. Sin embargo, es dudoso que los problemas estructurales que subyacen en la sociedad francesa puedan resolverse electoralmente.

A pesar de todos sus esfuerzos por impulsar reformas económicas impopulares, los gobiernos no pueden corregir a voluntad la caída de la productividad¹⁴. Desde la década de 1970, la desaceleración económica ha sido de escala mundial y sólo se ha visto interrumpida por breves auges que, a su vez, fueron seguidos de crisis y recuperaciones débiles y sin crecimiento del empleo. Además, aunque las empresas francesas logren recuperar una ventaja competitiva en el mercado mundial, es dudoso que ello se traduzca necesariamente en una vida más segura para los ciudadanos. Alemania, a menudo presentada como un modelo económico ideal por los reformistas franceses, pasó de ser el «enfermo» de Europa a su exportador industrial más competitivo, pero no ha sido capaz de evitar el aumento simultáneo de la precariedad y la pobreza en el trabajo¹⁵. Las empresas alemanas ganaron cuotas de exportación al tiempo que crecía el porcentaje de trabajadores con salarios bajos, uno de los mayores de la UE¹⁶.

En vísperas de las elecciones, merece la pena juzgar las opciones políticas existentes frente a los callejones sin salida estructurales a los que se enfrenta la economía francesa. Los partidos de centro-derecha —incluida *La République en Marche* de Macron o *Les Républicains*, liderados por Valérie Pécresse— solo desean permanecer en la actual trayectoria socialmente insostenible que consiste en eliminar piezas del aparato de bienestar con la esperanza de recuperar la competitividad internacional. En particular, Macron pretende redimirse y aplicar con mayor fervor algunas reformas emblemáticas de su programa que fueron aplazadas por los *Gilets Jaunes*, la huelga y la pandemia, en particular la reforma de las pensiones. La presidencia de Macron promete ser la anterior con esteroides: más reformas, más policía.

En el extremo ultraderechista del espectro político, la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen ha aprovechado con éxito en los últimos años la crisis social de Francia con su retórica antiinmigración y nacionalista. Sin embargo, si alguna vez llega al poder, tendrá que enfrentarse al hecho de que la desaceleración económica, y no la inmigración acelerada, ha ido agotando los recursos del país.

¹⁴ Levinson, Marc. *An Extraordinary Time*, London, 2016.

¹⁵ Nachtwey, Oliver. *Germany's Hidden Crisis*, London, 2018.

¹⁶ Según los últimos datos disponibles de Eurostat (2018), la proporción de asalariados con salarios bajos en la población activa fue del 20,7% en Alemania y solo fue precedida ligeramente por las economías de Europa del Este, incluidas Letonia (23,5%) Lituania (23%), Estonia (21,9%), Polonia (21,9%) y Bulgaria (21,4%). Característicamente, la proporción de trabajadores con salarios bajos en Francia es del 8,6%. Fuente: *Low-wage earners as a proportion of all employees 2006-2018*, Eurostat.

Tarde o temprano, correrá el riesgo de alienar a parte de su propio electorado cuando llegue el momento de emprender reformas dolorosas.

RN se enfrenta a la nueva competencia de otro candidato de extrema derecha, Éric Zemmour, que también tiene posibilidades de figurar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Zemmour, comentarista político de larga trayectoria y con conocidas opiniones islamóforas, es partidario de la teoría del gran reemplazo, avanzada por los teóricos de la conspiración de extrema derecha, según la cual la población blanca francesa y sus valores occidentales están siendo desplazados por oleadas ilimitadas de inmigración extraeuropea. Para remediar el declive de Francia, propone la expulsión pura y simple de Francia de los inmigrantes «no asimilados» (por ejemplo, los desempleados o con antecedentes penales) al tiempo que se recorta cualquier forma de ayuda social que pueda «atraer» a los extranjeros a buscar refugio en suelo francés. Sin embargo, su llamamiento excesivamente politizado y apasionado a atrincherar las fronteras francesas contra la supuesta amenaza de la inmigración, contrasta con su discurso totalmente despolitizado sobre asuntos económicos. En sus palabras, «la revolución está en otra parte», no en la política económica.

De forma nada sorprendente, su programa incluye una defensa bastante mundana del *statu quo* y una propuesta poco original de recortar los impuestos a las empresas para reconstruir la competitividad global de Francia. Al plantear el declive de Francia en términos de civilización, el dolor económico del ajuste parece un pequeño precio a pagar. A medida que la extrema derecha populista monopoliza la atención de los medios de comunicación y otros candidatos destacados (incluidos Macron y Pécresse) desplazan su discurso también hacia cuestiones de inmigración, la «cuestión económica» queda relegada a un estado de cuasi irrelevancia.

La izquierda, por su parte, se asemeja a un mercado sobreabastecido, con el voto fragmentado entre siete candidatos diferentes, y actualmente no representa ninguna amenaza seria para los candidatos de la derecha. Además, tanto la historia política reciente del país como las conjeturas actuales plantean dudas sobre la viabilidad de las propuestas socialdemócratas existentes. El *Parti Socialiste* —que en el momento de redactar este informe tiene su nivel más bajo de apoyo, con alrededor del 2% de los votos— hace tiempo que dejó de plantear una alternativa seria a la derecha, como demuestra su historial impecablemente favorable al mercado en las últimas décadas¹⁷. En un giro de 180 grados que recuerda en cierto modo al de Mitterrand en 1983, el presidente François Hollande (2012-2017) derogó su impuesto del 75% sobre las ganancias de los

¹⁷ Amable, Bruno y Palombarini, Stefano. *The Last Neoliberal*, London 2021, pp. 42-72.

millonarios durante el segundo año de su presidencia por preocupaciones relativas al atractivo económico de Francia. Además, su administración, en la que, en particular, Macron fue ministro de Economía, vio la aplicación de reformas del mercado laboral y de la fiscalidad de las empresas que fueron simplemente radicalizadas por el Gobierno actual.

Por otro lado, *La France Insoumise* de Jean-Luc Mélenchon tiene una plataforma socialdemócrata radical. Entre otras cosas, sus planes incluyen una democratización de la vida política, una ambiciosa transformación ecológica de la economía financiada por el Estado, una reindustrialización verde de Francia con puestos de trabajo seguros para todos, y la eliminación de la pobreza mediante el aumento del gasto social y una fuerte imposición sobre el capital. Sin embargo, la relación del partido con el crecimiento económico es ambigua. Condena la expansión económica sin rumbo que destruye el ecosistema, pero la realización de los objetivos de su plan presupone las condiciones de un crecimiento pujante. El mérito de *La France Insoumise* es poner sobre la mesa las cuestiones sociales y ecológicas en un momento en que otros contendientes políticos apuestan por la ley y el orden, la inmigración o las cuestiones religiosas para conseguir votos. Sin embargo, sus propuestas no son lo bastante radicales para romper la dependencia social de la dinámica de «crecer o morir» del capitalismo.

Los dilemas de Francia confirman la urgente necesidad de encontrar alternativas al paradigma de crecimiento capitalista, ya que los auges económicos son, en última instancia, suicidas desde el punto de vista ecológico y es improbable que vuelvan. En EE.UU., las previsiones ya sugieren que los planes fiscales de Biden —que Mélenchon acogió como la sentencia de muerte del neoliberalismo— impulsarán el crecimiento del PIB durante dos años, sólo para disminuir en 2023 y volver a tasas más familiares para una economía secularmente estancada. Si el mayor paquete de medidas de estímulo de la historia de posguerra de la mayor economía del mundo es incapaz de reactivar el crecimiento de forma sostenible, cabe dudar razonablemente de que las élites francesas puedan hacerlo mejor. Muchos de los candidatos —desde la socialista Anne Hidalgo a Péresse, pasando por Zemmour— se han comprometido explícitamente a reindustrializar Francia y restaurar su poderío industrial en la escena mundial. Sin embargo, como sugiere el caso alemán, esta estrategia de reindustrialización podría permitir al país recuperar algunas cuotas de exportación, pero difícilmente constituirá un baluarte contra la penuria social y el trabajo precario.

Cada cinco años, el electorado francés está llamado a elegir entre el mal, el mal menor y proyectos socialdemócratas desacreditados por una historia de giros de 180 grados y divisiones entre partidos. Sin embargo, centrarse en los candidatos individuales pasa por alto el problema mayor que caracteriza la política electoral francesa: actualmente no existe ninguna fuerza política capaz de formular un programa que pueda revitalizar de forma realista la vitalidad económica del país y evitar la acelerada precarización de la vida de los franceses. Las opciones políticas que se ofrecen reflejan la miserable condición del capitalismo tardío. Prometer normas de inmigración más estrictas y una enérgica represión de todo lo que desafíe el orden público parece una apuesta más segura que intentar cambiar la trayectoria de una economía capitalista en declive a escala mundial.

La experiencia política de Francia bajo la presidencia de Macron es la variante nacional de una tendencia más amplia hacia formas de gobierno más autoritarias en Europa. A medida que el mercado laboral ofrece menos oportunidades viables a las personas, aumentan los recursos que los Estados necesitarían para mantener alguna forma de coherencia social. Sin embargo, el estancamiento produce un conflicto distributivo de suma cero entre los recursos que hay que movilizar para seguir siendo competitivos en los ajustados mercados mundiales y los recursos necesarios para comprar la paz social. A medida que se agotan los medios tradicionales para gestionar la disidencia, los Estados se apresuran a aumentar sus aparatos represivos, con la aprobación de nuevas leyes policiales en los parlamentos nacionales, desde el Reino Unido a Francia, pasando por Grecia. Estas maniobras autoritarias representan la única alternativa racional que les queda a los Estados ante una tarea imposible: gobernar un mundo ingobernable¹⁸.

Si el estancamiento económico está aquí para quedarse, entonces la presidencia de Macron no fue más que una instantánea del futuro de Francia: masas de precarios y policías antidisturbios enfrentados entre las ruinas de una economía enferma que ofrece niveles crecientes de angustia social, pero nada para aliviarla.

¹⁸ Roufos, Pavlos. "Governing the Ungovernable", *Brooklyn Rail*, April 2021.